
Relación del Ayuntamiento con las empresas municipales: convenios-programa y encomiendas de gestión

*Ayuntamiento de Getafe*¹

PRIMERO.— Por acuerdos del Ayuntamiento Pleno se constituyeron las Juntas Generales de Accionistas de las empresas municipales y se aprobaron los diferentes Estatutos.

SEGUNDO.— Con fecha 18 de febrero de 1998 se emitió informe de la Secretaría General sobre suscripción de contratos programa con las tres empresas municipales: Getafe iniciativas, S.A. (GISA); Limpieza y medio ambiente (LYMA); suelo y la vivienda.

TERCERO.— Con posterioridad, todos los años se han encargado a las empresas las tareas a realizar a través de la aprobación del Ayuntamiento Pleno de Anexos al Contrato-Programa.

CUARTO.— En el momento presente entendemos necesario diferenciar los instrumentos jurídicos diferentes: a) El Convenio o Contrato-Programa. b) La encomienda de gestión para cada actividad, teniendo en cuenta por otra parte el nuevo régimen jurídico aplicable a los municipios de gran población.

QUINTO.— El artículo 2.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, modificado por la Disposición Final Octava de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2007, establece:

«2. No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, para financiar globalmente la actividad de la Administración a la que vayan destinadas, y las que se realicen entre los distintos agentes de una Administración cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la Administración a la que pertenezcan, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tengan atribuidas, siempre que no resulten de una convocatoria pública».

1. La autora de este informe es Doña Concepción Muñoz Yllera, Secretaria General del Ayuntamiento de Getafe.

Por otra parte, la Disposición Adicional Primera del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por RD 887/2006, de 21 de julio, establece:

«Disposición adicional primera. Régimen jurídico de los convenios celebrados entre la Administración General del Estado y las sociedades mercantiles y fundaciones del sector público estatal para su financiación. 1. Los convenios que celebre la Administración General del Estado con sociedades mercantiles y fundaciones del sector público estatal para su financiación se regularán conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 2. El contenido del convenio de colaboración comprenderá las materias previstas en el apartado 1 del artículo 68 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, si bien podrán excluirse alguna de éstas cuando por razón del objeto no sea necesaria su incorporación al mismo».

SEXTO.— El artículo 68 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria establece:

«Artículo 68. Convenios con el Estado. 1.— En los supuestos que se estipulen convenios y contratos-programa con el Estado que den lugar a regímenes especiales, tanto por las entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 64 de esta Ley como por cualquier otra que reciban subvenciones de explotación y de capital u otra aportación de naturaleza distinta con cargo a los Presupuestos Generales del Estado se establecerán, como mínimo, las correspondientes cláusulas sobre las siguientes materias: a) Hipótesis macroeconómicas y sectoriales que sirvan de base al acuerdo. b) Objetivos de la política de personal, rentabilidad, productividad o reestructuración técnica de la explotación económica, así como método indicadores de evaluación de aquellos. c) Aportaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en sus distintas modalidades a que se refiere este apartado. d) Medios a emplear para adaptar los objetivos acordados a las variaciones habidas en el respectivo entorno económico. e) Efectos que ha de derivarse del incumplimiento de los compromisos acordados. f) Control por el Ministerio de Hacienda de la ejecución del convenio y de los resultados derivados de su aplicación. 2.— El control a que se refiere el párrafo f) del apartado 1 anterior no excluirá el que pueda corresponder a los respectivos departamentos u organismo de los que dependan las entidades que hayan suscrito el correspondiente convenio. 3. La suscripción del convenio a que se refieren los apartados anteriores no excluirá la elaboración del presupuesto de explotación y de capital y del programa de actuación plurianual».

El régimen jurídico general de las Haciendas Locales se somete a su normativa específica de conformidad con el artículo 4 de la mencionada Ley.

El Texto refundido de Ley Reguladora de las Haciendas Locales, nada recoge al respecto por lo que estos aspectos de regulación pueden ser inspiradores para la Administración Local.

SÉPTIMO.— El artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos para las Administraciones Públicas excluye de la misma:

«l) Las encomiendas de gestión que se realicen a las entidades y a las sociedades cuyo capital pertenezca totalmente a la propia Administración pública».

Dicho apartado fue añadido por Real Decreto-Ley 5/2005 de 11 de marzo.

OCTAVO.— El artículo 15 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, regula la encomienda de gestión:

«1.— La realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los órganos administrativos o de las entidades de derecho público podrá ser encomendada a otros órganos o entidades de la misma o de distinta Administración por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. 2.— La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de la encomienda. 3.— La encomienda de gestión entre órganos administrativos o entidades de derecho público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o entidades intervinientes. En todo caso el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicado, para su eficacia en el Diario oficial correspondiente. Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada. 4.— Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y entidades de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por las diputaciones provinciales o en su caso cabildos o consejos insulares, que se regirá por la legislación de régimen local».

NOVENO.— Tras todo lo expuesto hemos de concluir que en la relación del Ayuntamiento y sus empresas municipales, existen dos instrumentos jurídicos diferentes.

a) El Convenio o contrato-programa comprensivo de las cláusulas contenidas en el artículo 68 de la Ley General Presupuestaria que como hemos señalado tiene una vigencia indefinida mientras exista la empresa.

b) La encomienda de gestión para cada una de las actividades de carácter material que dará lugar a un expediente concreto, elaborado por la Concejalía en la que se encuentra adscrita la empresa, comprensivo de: Memoria, proyecto o anteproyecto de la actividad debidamente valorado, con plazo de vigencia (anual o en su caso plurianual) naturaleza y alcance de la gestión encomendada; sólo se podrá encomendar la gestión de actividades a la empresas municipales en el ámbito de su actuación que aparece definido en su objeto social; el órgano competente del Ayuntamiento para adoptar el acuerdo de la encomienda de gestión así como la autorización y disposición de gasto es la Junta de Gobierno Local, al amparo de lo preceptuado en el artículo 127.f) y g) de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Es todo lo que tengo a bien informar.

Getafe, 19 de enero de 2007
LA SECRETARIA GENERAL